

\_\_\_\_\_Salta, de agosto de 2019. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Y VISTOS: Estos autos caratulados "C. I. D. P. T. G. I. E. A. D. R. B. B. S. vs. R., C. D. V.; T., J. C.; P., E. A.; G., B. O.; M., F.; O. S., E.; S., B.; A., M.; C., M. R.; A., J. L.; G., V. F. POR INTERDICTOS" - Expediente N° 44102/05 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación del Distrito Judicial del Norte – Orán (**EXP - 583331/17 de Sala II**) y, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_C O N S I D E R A N D O: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_La doctora **Verónica Gómez Naar** dijo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_I.- Que viene apelada sentencia dictada a fojas 219/224, en cuanto dispuso rechazar el interdicto de retener la posesión promovido por la C. I. del P. T. G. I. "E. A." en contra de las personas que individualiza en el escrito inicial (fs. 11 y vta.). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Para así decidir, la señora Jueza de grado consideró que la comunidad indígena no ha desconocido la posesión que ejercen los demandados sobre algunos espacios del inmueble, por lo que ambas partes ejercen actos posesorios en el predio. En cuanto al requisito de existencia de amenazas de turbación o turbaciones, del análisis de la prueba concluyó que los conflictos entre los poseedores se generaron a comienzos del año 2004, luego de conformarse la comunidad a los efectos legales por cuanto no todos compartían criterios respecto de la propiedad comunitaria. Aludió a la naturaleza indivisible de la propiedad comunitaria por el carácter colectivo de las tierras, y ponderó que los conflictos internos que se suscitan respecto de los espacios ocupados por uno de los miembros o familias es una cuestión que debe ser dirimida internamente por la comunidad, de conformidad a los artículos 4 y 5 de la Resolución 61/295 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y a lo previsto en el artículo 2 incisos "I" y "E" del estatuto comunitario. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Contra el fallo se alza la parte actora mediante el recurso de apelación interpuesto a fojas 225, el cual fue sostenido mediante el escrito de expresión de agravios presentado a fojas 227/229. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Se agravia la apelante, en primer lugar, de la afirmación de la *a quo* respecto del ejercicio de actos posesorios por parte de ambos litigantes, pues sostiene que la única que ejerce la posesión del predio es la comunidad, y sus miembros la ejercen en representación de ella. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Refieren que los demandados aceptaron formar parte de la comunidad indígena, y por ello firmaron las actas constitutivas y formaron parte de los censos presentados ante los organismos respectivos, lo cual hace que reconozcan el carácter de propiedad y posesión comunitaria. Afirman que si luego algunos miembros deciden abandonar el predio o dejar de formar parte de la comunidad, pierden todo derecho a la posesión comunitaria y no pueden volver a ingresar a la propiedad de conformidad al artículo 13 de la ley 23.302. Agregan que quedó acreditado con todas las pruebas testimoniales que la posesión es comunitaria y no individual, y se quejan porque no se han tomado en cuenta las declaraciones de los testigos T. y M., como tampoco el expediente N° 16.422/04 y la prueba en él reservada. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En segundo término, les agravia la interpretación que realiza la juzgadora al considerar que la comunidad indígena actora tiene comienzo en 2004 y que no todos compartían el criterio respecto de la posesión comunitaria, pues indican que los demandados eran integrantes de la comunidad y luego solicitaron su renuncia, lo cual implica el abandono de los derechos individuales sobre tierras comunitarias. Manifiestan que respecto de M. C, E. O., B. S., M. A., J. L. A. y V. F. G. debe proceder el interdicto de recobrar (SIC) pues se instalaron en terreno comunitario en el año 2005, e igual contra los que cedieron la posesión y abandonaron el inmueble, además de encontrarse en rebeldía. Se quejan de que la *a quo* no

haya tenido en cuenta la contundente prueba documental presentada, en particular la que detalla. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En tercer término, objeta que se haya citado doctrina alemana sobre coposesión de las cosas en condominio, cuando la corriente indigenista ha renegado siempre de que se estudie la temática aborígen desde una visión romanista, anglosajona o aria, y que en el caso no existe coposesión ni coposeedores sino una única posesión en cabeza de la comunidad. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Se agravia, asimismo, de que la Jueza de grado interprete que los conflictos internos entre familias o miembros de una comunidad sea una cuestión que debe dirimirse internamente por la comunidad. Aduce que en el caso concreto los conflictos se sucedieron porque algunos exmiembros vendieron sus voluntades al enemigo común- I. T.- y con ello renunciaron a continuar perteneciendo a la persona jurídica indígena; y si ha llegado a esta instancia es porque los demandados desconocen la autoridad o la decisión de la comunidad indígena por lo que pretender que lo arreglen internamente equivale a remitirlos al uso de la fuerza. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Se quejan, a continuación, del hecho de restarse importancia a los actos de violencia sucedidos y exigirse la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIIS) como necesarios para la solución de estos graves hechos. Indican que el INAI los tiene abandonados y que el interdicto lleva el “sumarísimo” plazo de diez años de litigio. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Por último, les agravia el rechazo del interdicto de recobrar y también del de turbación pese a las serias amenazas y hechos de violencia o despojo, acreditados en autos. Afirmar que los hechos de violencia tienen por autor intelectual al I. T. y que surgen de las denuncias a la policía de Orán, de las fotografías, notas periodísticas y demás pruebas que no fueron consideradas. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Corrido traslado, el memorial no fue contestado por la parte demandada. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_A fojas 315 se reanudó el llamado de autos para sentencia dictado a fojas 305, mediante proveído que se encuentra firme, por lo que la causa se encuentra en estado de ser resuelta. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_II.- Que en forma preliminar, es preciso recordar que nuestro sistema legal, basado en inveterados principios consagrados en el derecho romano, prohíbe hacerse justicia por mano propia. Es así que una persona, aún con un título válido, no puede, en caso de oposición, tomar posesión de la cosa: debe demandarla por las vías legales, tal como lo prescribe el derogado Código Civil de Vélez (art. 2468). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En protección de las relaciones posesorias -tanto del poseedor legítimo con derecho de poseer (*ius possidendi*) como del ilegítimo que solamente tiene derecho a la posesión (*ius possessionis*)- la ley instituye las acciones posesorias que tienen por objeto obtener la restitución o manutención de la cosa (Art. 2487 Cód. Civ.), de acuerdo a cual sea la lesión sufrida: despojo o turbación (v. Highton, Elena I., *Posesión*, págs. 207 y ss., Hammurabi, Bs. As., 1984). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En el presente caso, la actora ha entablado la acción de retención de la posesión, tal como surge de la demanda promovida a fojas 11/14, malgrado el error en que incurre la apelante en su memorial al aludir al interdicto de recobrar. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Los presupuestos y el trámite del interdicto articulado se encuentran regulados por las disposiciones de los artículos 619 a 621 del Código Procesal, según las cuales corresponde al demandante acreditar el cumplimiento de los dos requisitos de procedencia que establece el primero de dichos artículos, a saber: (i) que quien intente la acción se encuentre en la actual posesión o tenencia del inmueble; (ii) que alguien amenazare perturbarle o perturbase tal posesión o tenencia mediante actos materiales. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Ahora bien, se presenta en el caso la particularidad de que la posesión que se invoca al demandar es de carácter colectivo o comunitario, por corresponder al ejercicio de una comunidad indígena sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Al respecto, es conveniente recordar que la protección de la propiedad comunitaria tiene en nuestro derecho rango constitucional, a partir de la reforma del año 1994 en su artículo 75 inciso 17, anteriormente consagrado por ley N° 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, sancionada el 30 de septiembre de 1985, y sobre la cual resultan también de una relevancia significativa las previsiones de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo N° 169, que enfatizan el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a la identidad indígena y la preservación de su cultura. No obstante, aún no se ha sancionado una ley de instrumentación de la propiedad comunitaria de las tierras en las comunidades indígenas. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En el orden local, la Constitución de 1986 preveía la protección del indígena mediante una legislación adecuada (art. 15), pero es la Constitución vigente de 1998, la que garantiza el derecho de posesión y propiedad comunitaria, en su artículo 15, proclamando el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio salteño, de la personalidad de sus propias comunidades, del respeto a su identidad, a una educación bilingüe e intercultural, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan y la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, su inenajenabilidad e intransmisibilidad. Luego se sancionó la ley N° 7121 sobre desarrollo de los pueblos indígenas de Salta, que crea el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y se ocupa de regular, entre otros aspectos, la entrega de los inmuebles en propiedad comunitaria, a título gratuito y respetando los derechos de terceros (conf. art. 15). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En cuanto a las características de la propiedad comunitaria indígena, no cabe duda de que se trata de un derecho real autónomo, de orden público, cuya estructura deriva directamente de la Constitución Nacional y que no puede ser identificado con las formas tradicionales del dominio o del condominio, con las cuales presenta profundas diferencias (v. Alterini, Jorge H., Pablo M. Lorna y Gabriela A. Vázquez, *Propiedad indígena*, págs. 154 y ss., EDUCA, Buenos Aires, 2005). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_La diferencia se origina desde la misma subjetividad del indígena en contraposición del occidental, pues mientras aquel es uno y mismo con su cuerpo, con la tierra y con toda la naturaleza, éste se desdobra en una conciencia que puede decir “soy propietario de mi cuerpo”, como un Yo escindido de su cuerpo y de su espíritu, tal como lo explica el doctor en sociología jurídica de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Del Percio (*Política y destino*, págs. 216 y ss., Sudamericana, Buenos Aires, 2009). La relación, por tanto, del indígena con la tierra es de una unión que esfuma la distinción entre lo propio y lo ajeno, y más de sentir que son poseedores de la tierra, su concepción encierra la idea de que la tierra los posee a ellos (Alterini, *op. cit.*, pág. 155). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Es así que el sujeto de la tutela constitucional no es el indígena en cuanto individuo aislado sino los pueblos indígenas argentinos a través de sus comunidades, como sujetos colectivos. Tal como se desprende del citado Convenio N° 169, el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras en cabeza de los pueblos indígenas y no de modo individual, del indígena con independencia de su comunidad, toda vez que a lo que propende es a la perdurabilidad de estos pueblos con sus rasgos sociales y culturales. En tal sentido, se ha interpretado que el texto constitucional de 1994 dejó vacía de contenido la ley 23.302 en lo concerniente a la propiedad individual indígena (Alterini, *op. cit.*, pág. 160). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente

que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales también es un derecho colectivo, cuyo titular es el pueblo correspondiente, dimensión colectiva que se ha considerado coexistente con la dimensión individual del derecho, sin que exista una contradicción entre la protección de las dimensiones individual y colectiva de los derechos de propiedad territorial de los pueblos indígenas y sus miembros, y reconociendo las formas comunales de tenencia de la tierra por los indígenas y la relación singular que los pueblos indígenas mantienen con su tierra. En palabras de la Corte, “mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos- esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal” (Caso de la Comunidad Mayagna -Sumo- Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Asimismo, es un derecho sobre cosa propia, de adquisición originaria, que tiene por fuente la Ley Fundamental y con los caracteres de perpetuidad, exclusividad, indisponibilidad e inembargabilidad. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ahora bien, en el presente caso se pretende el cese de turbaciones a la posesión indígena de las tierras por parte de miembros de la misma comunidad que, en algún caso, han remitido su renuncia a tal calidad al INAI, manifestando desacuerdos con las actuales autoridades, desconociendo su legitimidad y objetando que los terrenos que ocupan deban ser considerados propiedad comunitaria (v. fs. 21). Es decir que no se reclama la recuperación de la posesión ni se invoca despojo sino que, por el contrario, la misma demandante ha manifestado que no era su intención despojar a los demandados de la posesión que tienen tal como

con toda claridad lo expresan al responde la excepción de falta de legitimación a fojas 131vta., afirmación que puede parecer contradictoria con el carácter colectivo de la posesión indígena pero que demuestra la voluntad de respetar el uso de las tierras por parte de éstos. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_A la luz de estas consideraciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios de la actora apelante. En cuanto al primero, de una correcta lectura del fallo en crisis surge que la jueza de grado ha considerado en todo momento el predio involucrado como propiedad o posesión indígena, y de tal manera ha concluido que se trata de conflictos suscitados entre los miembros que deben resolverse dentro de la misma comunidad. El hecho de haber expresado que unos y otros ejercen actos posesorios no modifica en nada el resultado de su decisión pues dado que “la comunidad indígena” no es una persona humana solamente puede ejercer la posesión a través de los miembros que la componen. La invocación tardía, recién en esta instancia, de la norma del artículo 13 de la ley 23.302 no resulta aplicable en la especie, toda vez que se refiere al caso de abandono de las tierras por parte de algún miembro de la comunidad y no a la situación de conflicto suscitada por la legitimidad de las autoridades designadas o la renuncia a ser miembro de ésta, sin abandono de las tierras. Sobre la cuestión, se ha señalado que la extinción por el “no uso” propia de los derechos reales de goce de grado inferior al dominio (usufructo, uso, habitación, servidumbre, etc.) no se aplica a la propiedad indígena cuando la ocupación de la tierra no es exclusiva y la utilización se hace a la manera de esos derechos reales de grado menor (Alterini, *op. cit.*, pág. 193). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Del mismo modo resulta tardía e inatendible la referencia al “despojo” de la posesión que introduce en el alegato en contra de algunos miembros de la comunidad y la que ahora agrega a los hechos de turbación, no obstante resultar contrarias - si hay despojo quien pierde la posesión no



puede ser turbado en ella, es decir, o perdió la posesión o la conserva -, siendo la turbación la causa del interdicto de retener promovido en autos.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Dicha confusión se reitera en el segundo agravio, en el cual solicita que prospere el “interdicto de recobrar” contra los demandados que no han contestado la demanda, invocando que cedieron la posesión y abandonaron los inmuebles. El principio de congruencia -que impide fallar sobre cuestiones no propuestas por las partes - se relaciona con los límites que presenta el ámbito de conocimiento del juez como manifestaciones del principio dispositivo. La decisión judicial se halla circunscripta por las pretensiones deducidas en el juicio (conf. art. 163, inc. 6° CPCC), concretadas en la etapa de constitución del proceso, esto es, la demanda y su contestación. Así, se entiende por congruencia, en el proceso civil, el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, las cuales deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones contenidas en la demanda y las excepciones oportunamente deducidas (conf. Devis Echandía, Hernando, *Teoría General del Proceso*, tº 2, pág. 533, ed. Universidad, Bs. As., 1985). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_De tal manera, el fallo impugnado resuelve correctamente sobre la pretensión formulada en autos y no cabe ahora transformar la demanda en un interdicto de recobrar la posesión en contra de quienes fueron citados para responder la pretensión interdictal de retener en los precisos términos expuestos en la demanda. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Asimismo, la Corte de Justicia ha dejado en claro que el artículo 271 del Código Procesal impide al tribunal de alzada fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, resaltando, con cita de Palacio, que “la regla general que consagra la norma es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio

en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente; el proceso es único y el recurso de apelación es una etapa o instancia dentro de ese proceso (...) la ley ha distribuido el conocimiento de cada etapa a un tribunal distinto; pero siendo una etapa o instancia dentro de un único proceso, el contenido u objeto de esta segunda etapa nunca puede exceder – salvo supuestos excepcionales previstos en la ley- del contenido u objeto del proceso planteado en la primera instancia.” (Tomo 122: 63/70). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Los restantes agravios se refieren a la interpretación que realiza la *a quo* en cuanto manifiesta que los conflictos internos entre las familias o miembros de la comunidad deben dirimirse internamente en la comunidad. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Al respecto, debe decirse en primer lugar más que una interpretación o manifestación, se trata de la decisión que se adopta en el fallo en crisis mediante la aplicación de las disposiciones estatutarias e internacionales allí citadas. La *a quo* resuelve que la situación de hecho planteada en el juicio no puede ser encauzada a través de este interdicto sino que debe ser dirimida internamente por la comunidad, conclusión que considero acertada y adecuada a las particularidades del instituto que se analiza. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ En efecto, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” (Resolución N° 61/295 de la Organización de Naciones Unidas) establece: Artículo 3. “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Teniendo en cuenta que este derecho es de primordial importancia para la perdurabilidad de sus identidades y formas de vida dentro del marco del estado en que viven, se ha propuesto la siguiente regulación sobre este aspecto: “el régimen interno de uso y goce de la tierra se rige por las previsiones del estatuto de la comunidad, debidamente inscripto, y en subsidio por los usos y costumbres de ésta” (Alterini, *op. cit.*, pág. 194). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_En el caso, el estatuto de la comunidad indígena actora establece que la Asamblea actuará de juez en cuestiones planteadas por el Consejo respecto de las conductas de sus miembros y los integrantes de la comunidad (art. 3 “E”); y en su artículo 2º “I” dispone que ambos Consejos decidirán la sanción de los miembros que agravien irremediabilmente a la comunidad, insulten públicamente a miembros de los Consejos o realicen acciones que respondan a intereses contrarios a los de la comunidad, particularmente disponer bienes de ésta. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Esto implica que en el seno de las mismas instituciones comunitarias deben resolverse los conflictos que se susciten entre sus miembros o entre éstos y las autoridades de la comunidad. Esta forma de solución de los problemas que se presentan sobre el uso de las tierras de propiedad de las comunidades es la que se ajusta a los postulados de la Convención 169 de la OIT, que en su preámbulo reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y cuando en su artículo 18 hace referencia a la previsión en las leyes de los Estados de sanciones contra la intrusión o el uso no autorizado en las tierras de los pueblos indígenas, se refiere a “personas ajenas a ellos”, dejando de esa manera de lado las cuestiones suscitadas por personas no ajenas por el uso de las tierras, para ser dirimidas internamente de acuerdo a sus estatutos o usos y 10 costumbres. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Por ende, cabe concluir sin hesitación que los conflictos internos en la comunidad relativos a la posesión, uso y explotación de las tierras debe

ser resuelto en la forma que dispone el estatuto de la comunidad, siguiendo los principios de la declaración de Naciones Unidas y de la Convención de la OIT antes citadas. Vale decir que la vía del interdicto no es apta para resolver estos conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad o quienes se reconocieron como tales, y tampoco puede devenir una vía sucedánea para la hipótesis de mal funcionamiento o demora en el procedimiento de solución previsto. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Con relación a los actos de violencia verbal, insultos o amenazas de lesiones a las personas, denuncias cruzadas y demás actos invocados por la agraviada, claramente no constituyen actos turbatorios de la posesión por lo que exceden el ámbito de este tipo de acciones posesorias que solamente apuntan a evitar el apropiarse de propia mano de la tenencia o posesión de un bien inmueble o turbar la tenencia o posesión que otro tiene. Dicha turbación debe consistir ineludiblemente en actos materiales que impliquen una pretensión sobre la cosa misma y no un ataque a la persona titular o que el único propósito sea causar daño (Highton, pág. 293). La gravedad o envergadura de tales hechos no modifican su naturaleza ajena a esta clase de acciones, pudiendo ser objeto de denuncia y encauzamiento por las vías penales o policiales que correspondan, puesto que el derecho constitucional a la propiedad indígena y al respeto de su identidad cultural no priva a sus miembros de los derechos de cualquier ciudadano argentino, de acuerdo a la legislación en un pie de igualdad y fraternidad. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Por consiguiente, debe concluirse que los agravios no alcanzan a rebatir los fundamentos de la sentencia de grado, que se ajusta a derecho. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ III.- Que a la luz de lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas a la parte actora apelante por aplicación del principio objetivo del vencimiento consagrado en el artículo 67 del Código de Forma. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ El doctor **Alejandro Lávaque** dijo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES  
EN LO CIVIL Y COMERCIAL,** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **I.- RECHAZA** el recurso de apelación interpuesto por la actora a  
fojas 225 y, en su mérito, **CONFIRMA** la sentencia dictada a fojas  
219/224, en lo que fue materia de agravios. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **II.- IMPONE** las costas del recurso a la parte actora apelante. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **III.- ORDENA** que se registre, notifique y baje.- \_\_\_\_\_